



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Suplesalud IPS S.A.S.
Demandado	Equipar Salud S.A.S.
Radicado	No. 05266 31 03 001 2018 00062 02
Instancia	Segunda
Interlocutorio	Nº 127
Procedencia	Juzgado 1º Civil del Circuito de Envigado
Asunto	Resuelve recurso de apelación
Decisión	Confirma
Tema	Liquidación de costas
Subtema	Parámetros para liquidar costas. Gastos procesales. Jurisprudencia.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), dieciséis de diciembre de dos mil veintidós

I. OBJETO

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra del auto proferido el 14 de julio de la presente anualidad, por el **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL**

CIRCUITO DE ORALIDAD DE ENVIGADO (ANT.), a través del cual aprobó la liquidación de costas dentro del presente proceso Ejecutivo promovido por **SUPLESALUD IPS S.A.S.,** contra **EQUIPAR SALUD S.A.S.**

II. ANTECEDENTES

Hechos y actuaciones: Por auto del 14 de julio de la presente anualidad, la señora Juez a quo aprobó las costas causadas en este proceso y liquidadas en \$14.280.000,00, a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada, rubro que corresponde a las agencias en derecho porque no se encontraron gastos procesales para reconocer.

Recurso de reposición y apelación: El extremo pasivo, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación porque considera que al liquidar las costas no solo se debe tener en cuenta las agencias en derecho, sino también los gastos del proceso, que en el presente caso corresponden a los honorarios del perito grafólogo, asumidos por la ejecutada y debidamente acreditados.

El Juzgado por auto del 10 de agosto de este año, desató desfavorablemente el recurso de reposición y, subsidiariamente, concedió el de alzada, aduciendo que según el art. 364-2 del C.G.P., los honorarios de los peritos están a cargo de quien haya solicitado la prueba; en el presente caso, la prueba grafológica fue decretada a solicitud del extremo pasivo; en la liquidación de costas se deben tener en cuenta los gastos que se encuentren comprobados dentro del trámite del proceso y, en el caso

sub-judice, no existe evidencia del pago de los honorarios al perito grafólogo por parte del extremo pasivo, por lo que no incluyó dicha suma como gastos en la liquidación de costas, tal como lo ordena el artículo 366 Ib.

II. CONSIDERACIONES

Las costas y su regulación legal: Las costas son la erogación económica que debe asumir la parte cuyas pretensiones o excepciones no han salido avantes en el proceso o en la correspondiente actuación; éstas equivalen al concepto de los gastos sufragados por las partes para llevar adelante el pleito, cuya liquidación se fracciona en dos aspectos: **expensas** y **agencias en derecho**. Las primeras corresponden a todos los gastos necesarios para el trámite del proceso y que no conciernen a honorarios de abogado, dado que el segundo hace parte de las denominadas agencias en derecho, las cuales fija el juez teniendo en cuenta las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura. Debiéndose precisar, que la condena en costas es a favor de la parte, no de su apoderado.

Reclama el recurrente, que se deben reconocer dentro de la liquidación de costas como gastos del proceso, lo concerniente a los honorarios del perito grafólogo, que fueron sufragados por el extremo pasivo beneficiario de la condena en costas.

Al efecto tenemos que el art. 366 del C.G.P., consagra las reglas para la liquidación de las costas y agencias en derecho; al efecto ordena:

“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

“1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.

“2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.

“3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.

“Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo

Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.

"4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

"5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.

"6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obediencia al superior, según el caso" (Resaltamos).

2. Del caso concreto

Frente a la inconformidad presentada por el recurrente, observa la Sala, que si bien tal como lo solicita y lo dispone

la norma que viene de reseñarse, los honorarios de los peritos serán incluidos en la liquidación de costas; pero lo cierto, es que para este cometido es forzoso e imprescindible que el pago de los honorarios aparezca comprobado y el juez los encuentre razonables.

En este caso, al plenario no se adosó constancia del pago de los honorarios por la parte demandada al perito grafólogo, como lo coligió el Juzgado de instancia y, sin el cumplimiento de esos requisitos establecidos en la norma que viene de transcribirse, a todas luces resulta improcedente su reconocimiento e inclusión en la liquidación de costas. Frente a este tópico, la jurisprudencia patria ha señalado:

"4.- El ordenamiento procesal civil adopta un criterio objetivo, no sólo para la condena, pues "se condena en costas al vencido en el proceso, incidente o recurso, independientemente de las causas del vencimiento"^[3], sino también para la determinación de aquellas en cada uno de sus componentes, siguiendo en este punto la teoría moderna procesal pues, como lo señala Chiovenda, "la característica moderna del principio de condena en costas consiste precisamente en hallarse condicionada al vencimiento puro y simple, y no a la intención ni al comportamiento del vencido (mala fe o culpa)"^[4]. En efecto, aún cuando el carácter de costas judiciales dependerá de la causa y razón que motivaron el gasto, y la forma en que se efectuó^[5], su cuantificación está sujeta a criterios previamente establecidos por el legislador, quien expresamente dispuso que "solo habrá lugar a costas cuando en el expediente

aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” (C.P.C., artículo 392-8).

“Respecto de las expensas, el numeral 2º del artículo 393 del C.P.C., señala los requisitos específicos para su procedencia, y exige que “aparezcan comprobados, hayan sido útiles, y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”, de manera similar a como lo prevén otros ordenamientos^[6]. No obstante, la utilidad del gasto debe ser entendida como una utilidad razonable y proporcionada, tomando en consideración tanto la naturaleza del proceso como la finalidad de la actuación desplegada, a fin de atender los principios de justicia material y equidad. Así, aun cuando el juez tiene cierto margen de discrecionalidad, de ninguna manera puede considerarse que esa facultad supone arbitrariedad, como lo sugiere el actor, pues, como fue explicado, su decisión deberá sujetarse a las exigencias de (i) comprobación, (ii) utilidad, (iii) legalidad y (iv) razonabilidad y proporcionalidad del gasto, con lo cual se garantiza el mandato constitucional que impone a los jueces, en sus decisiones, estar sometidos al imperio de la ley (C.P., artículo 230)” {CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002, M.P. Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT}.

A mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,**

II. RESUELVE:

- 1. CONFIRMAR** el auto proferido el catorce (14) de julio de la presente anualidad, conforme las razones que vienen de exponerse.
- 2.** Sin costas en esta instancia, porque no se causaron.
- 3.** Devuélvase el expediente a su lugar de origen, para que se surta el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', written over a horizontal line.

LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
Magistrado